



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**PROCESO:** ORDINARIO - OTROS ASUNTOS.

**DEMANDANTE:** JHONNY ALBERTO MORENO OJEDA

**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

**RADICACIÓN:** 08-001-31-05-013-2022-00223-00.

**INFORME SECRETARIAL:** Señor Juez, a su Despacho la presente demanda informándole que por reparto de la Oficina Judicial correspondió a este Juzgado en virtud de la declaratoria de falta de competencia de que fue objeto por parte del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral - Sección B en Sala Unitaria mediante auto del 21 de julio de 2.021, la cual se encuentra radicada. Es de anotar que los términos judiciales estuvieron suspendidos por tres días hábiles correspondientes a los días 2, 3 y 4 de mayo de 2.023, así como los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, con ocasión al cierre extraordinario ordenado con el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante los Acuerdos No CSJATA23-209 y 260 de 2023. Así mismo, le comunico que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario a mitad de febrero de este año, está en labores de organización para el trámite de los procesos y depuración de archivos con ocasión a la digitalización del Juzgado frente expediente anteriores a este pendiente por tramitar, labores dentro de las cuales se encontró e identifiqué este proceso. Sírvese proveer.

Barranquilla, 11 de agosto de 2023.

MARIA B. POTES SANTODOMINGO.  
Secretaria.

**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.** Barranquilla, once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2.023).

Visto el informe secretarial que antecede y estudiada la demanda junto con sus anexos, observa el Despacho que el demandante JHONNY ALBERTO MORENO OJEDA, por medio de apoderado judicial, presenta demanda de nulidad y el restablecimiento del derecho en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES., y esboza como pretensiones principales que se declare la nulidad de las Resoluciones SUB4969 de 10 enero del 2020 por medio de la cual se decidió "*revocar todas y cada una de sus partes la resolución No. GNR 2070040 del 11/07/2015 modificada por la Res. GNR 304543 del 03 de octubre de 2015, mediante la cual se reconoció una pensión de invalidez, con base auto de cierre de investigación No. 2153 del 18 de diciembre del 2019*", y SUB 10176 de 16 enero de 2020, e incluso a título de restablecimiento del derecho, se ordene a COLPENSIONES por concepto de reparación por los daños causados la reparación de perjuicios morales la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigente, reconocer las mesadas dejadas de pagar desde diciembre de 2019 hasta la fecha, e intereses moratorios.

Fundamenta sus pretensiones entre otros aspectos en que, se cumple con lo expuesto en el artículo 93 del CPACA, en cuanto a las denominada casuales de revocatoria de los actos administrativos en los numerales 1 y, 3, los cuales enmarcan el agravio injustificado a una persona, indicando que no es más que la solicitud al instructor judicial, para que por medio del presente control revoque un acto administrativo con el cual se han vulnerado los diferentes derechos a una persona inválida en forma indiscriminada a lo cual tiene derecho, en concordancia con lo establecido en el artículo 138 del CPACA.

Es de advertir que, el presente proceso fue remitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala Unitaria de Decisión Oral "B", el cual mediante auto de fecha 21 de julio de 2.021, declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JHONNY ALBERTO MORENO OJEDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y ordenó remitir el proceso a los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla para su respectivo reparto. Lo anterior al estimar que dada la

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.  
Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)  
Barranquilla - Atlántico. Colombia  
**Correo:** [lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co)



No. SC5780 - 4

No. GP 059 - 4



### JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

vinculación y el último cargo que ejerció el demandante es una condición que excluye a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de hacer algún pronunciamiento, que para el caso la competencia para conocer de estos procesos recae exclusivamente en la jurisdicción ordinaria laboral.

Ahora bien, encuentra el Despacho que la presente acción, el asunto principal a resolver, es la nulidad de los actos administrativos de carácter particular expedidos por una entidad pública, pretensión que conforme al sistema jurídico colombiano, solo es posible elevarla a través de un medio de control (nulidad simple o con restablecimiento del derecho) cuyo conocimiento y decisión se encuentra atribuido a la jurisdicción contenciosa administrativa y cuya competencia no es posible prorrogar para ninguna otra jurisdicción, pues solo a ella le corresponde dilucidar la verdadera existencia del principio de legalidad que rodea los actos administrativos demandados.

El artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, impera que:

**“COMPETENCIA GENERAL.** <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.
4. <Numeral modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.
6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.
7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.
8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.
9. El recurso de revisión.
10. <Numeral adicionado por el artículo 3 de la Ley 1210 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo”.

Siendo estos, los asuntos cuya definición está atribuida por la Ley de manera general a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, junto con otros regulados también en la Ley, en el CST y otros específicos y sumarios contemplados en ella, de lo cual se infiere que el legislador no atribuyó a esta jurisdicción el asunto que fue remitido para conocimiento por el Tribunal Administrativo del Atlántico en Sala Unitaria, en donde se pretende la nulidad de un acto administrativo y el restablecimiento del derecho del demandante afectado, como en cambio sí lo dispone especialmente para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el artículo 97 del CPACA frente a la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto, en los siguientes términos:

“Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al Juez su

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)

Barranquilla – Atlántico. Colombia

**Correo: [lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co)**



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**suspensión provisional.**

PARAGRAFO: En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.” <Negrilla y subraya fuera de texto>

Lo cual guarda también ilación con la cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso estatuida en el artículo 104 del CPACA, así: “**La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,** además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”, no entrando el presente caso dentro de las excepciones establecidas en el artículo 105 de esa normatividad al tratarse el presente asunto de la denominada “acción de nulidad y restablecimiento del derecho” adelantada por el administrado ante incluso la eventual acción de lesividad que pueda promover la propia entidad pública hoy demandada, lo que encuadra a su vez en el artículo 138 ibidem, y no dentro del ámbito de la Jurisdicción Ordinaria Laboral junto a su compendio procesal.

Luego, la admisión de esta demanda no depende de la competencia por factor objetivo, territorial o por conexidad, sino de la verificación de la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, la cual se echa de menos; por lo que, con fundamento en el artículo 16 del CGP, aplicable por analogía en materia laboral en virtud del principio de integración normativa, admitir y dictar sentencia en la presente acción, constituiría un vicio procedimental que no es saneable en los términos de ese estatuto procesal y que el Juez puede e igualmente debe declarar de oficio.

La Corte Constitucional ha señalado que para la determinación de la competencia se debe tener en cuenta el principio de legalidad y el debido proceso, reflejado en este asunto en el hecho de que las normas del CPACA, sumadas a precedentes, armonizados, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, este último en decisión de conflicto negativo de competencia, consideran que pretensiones de esta índole definen legalmente el conocimiento de tales asuntos en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; igualmente no puede dejarse a un lado el principio de imperatividad, esto es, su obligatoria observancia no susceptible de derogatoria ni desconocimiento por la voluntad de las partes o de los funcionarios; el principio de indelegabilidad, en cuanto a que la jurisdicción competente, no puede ceder ni delegar la competencia que detenta legalmente; y finalmente su carácter de orden público, fundamentado en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés general.

Respecto al Juez competente y la clase de acción, en sentencia SU-182 de 8 de mayo de 2019, M.P. Dra Diana Fajardo Rivera, la aludida Alta Corporación vislumbró que corresponde el conocimiento del asunto, a la jurisdicción contenciosa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando esgrimió que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo superó esta discusión entre el acto ficto y el expreso, que existía de cara a la acción de lesividad en el antiguo Código Contencioso; pero que también la nueva normatividad, consagra el principio de inmutabilidad de los actos, de manera más amplia y clara que en el antiguo Código, pues ya no reconoce de forma general la posibilidad de revocar unilateralmente actos contrarios a la Constitución o la Ley, “**sino que obliga a las autoridades a demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo**”; que a partir del actual artículo 97 del CPACA, solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin el consentimiento del interesado. “**De lo contrario, las entidades tendrán que acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (de lesividad) para demandar ante un juez administrativo su propio acto**”. (Negrilla y subraya fuera de texto original).

No obstante, también aclaró que “la naturaleza jurídica de la revocatoria directa implica que sus efectos solo aplican hacia el futuro (ex nunc). Es por ello que la administración no puede recuperar los dineros girados a través de este mecanismo, **sino que tendrá que acudir al juez administrativo.**”

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.  
Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)  
Barranquilla – Atlántico. Colombia  
**Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co**



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que se derivaron de una actuación irregular, y decidir definitivamente sobre la nulidad de un acto administrativo<sup>1</sup>.**

Así las cosas, teniendo en cuenta que lo que la parte demandante pretende es la nulidad de varios actos administrativos y el restablecimiento de su derecho, la jurisdicción competente es la contenciosa administrativa y no la ordinaria laboral, la cual conforme al artículo 2 del CPT y de la SS, expresamente conoce de los asuntos antes referidos y en ninguno de ellos, hace referencia a súplicas como las que aquí se pretenden decidir.

En consecuencia, esta agencia judicial, se abstendrá de avocar el conocimiento del presente asunto, y por ende, de admitir la demanda, debiéndose declarar la falta de jurisdicción y competencia para conocer de esta acción, y de contera ante el rechazo de la misma, procederá a proponer conflicto negativo de jurisdicción para que sea resuelto por la Honorable Corte Constitucional, conforme lo establece el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2.015.

Por lo expuesto, el Juzgado,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: ABSTENERSE** de avocar el conocimiento del presente asunto, y por ende, de admitir la presente demanda, por las razones expuestas.

**SEGUNDO: DECLÁRESE** la falta de jurisdicción y competencia para conocer de la presente acción, y por ende se rechaza la misma. En consecuencia, **REMITASE** el expediente de la referencia a la Honorable Corte Constitucional, para que dicha Corporación dirima el conflicto negativo de jurisdicción que se plantea en esta providencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**EL JUEZ,**

  
JOSE IGNACIO GALVAN PRADA  
C-2022-00223-00

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla  
Día 15 Mes 08 Año 2023  
Notificado por el Estado N° 0120  
La Providencia de fecha Día 11 Mes 08 Año 2023  
La Secretaria María Bernarda Potes Santodomingo

<sup>1</sup> “[E]l acto de revocación es una decisión administrativa que rige hacia el futuro. En esa medida, la recuperación de los dineros indebidamente pagados sólo es posible lograrlo por conducto del juez, que es el competente para definir bien el restablecimiento del derecho y/o la reparación del daño o éste solamente, según se trate de la acción contenciosa que sea precisa instaurar”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).